

INE/CG81/2017

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente número **INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la resolución **INE/CG17/2016**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y del Ayuntamiento de Sahuayo, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el Estado de Michoacán, mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Verde Ecologista de México, ello en atención al Punto Resolutivo **DÉCIMO TERCERO**, considerando **18.5**, inciso **e)**, conclusión **7**. A continuación se transcribe la parte conducente:

“DÉCIMO TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento oficioso señalado en el considerando respectivo.”

"18.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

(...)

e) Procedimiento oficioso: conclusión 7 (...)

Monitoreo de Internet (Eventos en salón)

Conclusión 7

'7. Del monitoreo realizado por la autoridad a páginas de internet, se advirtieron diversos conceptos de gasto que beneficiaron al candidato del PVEM, sin embargo no se tuvo certeza de la vinculación de los mismos con el objeto propio de las actividades de campaña.'

**ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO.**

En consecuencia, al efectuarse la compulsa correspondiente en páginas de internet, se detectaron diversos gastos en beneficio del candidato al cargo de Diputado Local; sin embargo, no se localizó el registro de las erogaciones realizadas en el "Sistema Integral de Fiscalización". A continuación se detallan los casos en comento:

CARGO	NOMBRE DEL CANDIDATO	FECHA	CONCEPTO	GASTOS IDENTIFICADOS	LINK DE LA PAGINA DE INTERNET	ANEXO DE LA RAZON Y CONSTANCIA
Diputado Local	Luis Humberto Rodríguez Santana	26/12/15	Consultas médicas gratuitas	-Consultas médicas -Medicamentos -Médico -Tráiler -Remolque rotulado con la imagen del candidato	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=145456009147919&set=pcb.145456062481247&type=3&theater/	INT-PVEM-5

Mediante oficio de notificación INE/UTF/DA-L/25795/15, se le notificó al partido dicha observación.

En el escrito de respuesta sin número de fecha 18 de diciembre de 2015, el PVEM manifestó lo siguiente:

'Con relación a la observación que se contesta me permito aclarar lo siguiente:

(...)

4.- Con relación a la rotulación del remolque, me permito aclarar que la información correspondiente fue presentada mediante el Sistema Integral de Fiscalización, Póliza 12, con toda la información necesaria.'

Por lo que corresponde al caso señalado con (7) en la columna denominada 'GASTOS IDENTIFICADOS' del cuadro que antecede, el PVEM presentó el registro de la rotulación del remolque, sin embargo no se tiene certeza de la vinculación del gasto con el objeto propio de las actividades de campaña, adicionalmente, se advierten objetos relacionados con la rotulación del remolque, como son, un tráiler el remolque en sí mismo, el cual fue utilizado como consultorio móvil y el costo que hubiese implicado las consultas médicas realizadas, conceptos de los cuales no se tiene certeza de la vinculación de los gastos realizados con el objeto de campaña.

*En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de determinar si se acredita una irregularidad en materia de origen, monto, destino y aplicación de recurso, relacionados con los conceptos observados.
(...)"*

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/P-COF-UTF/18/2016**, notificar al Secretario del Consejo de su inicio; así como, publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto (Foja 7 del expediente).

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.

- a) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 8-9 del expediente).
- b) El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 10 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/3619/16, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 11 del expediente).

V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Verde Ecologista de México. El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/3636/16, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo oficioso de mérito (Foja 13 del expediente).

VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros.

- a) El dos de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/135/2016, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), remitiera la información y documentación comprobatoria que obrara en sus archivos relacionados con la conclusión objeto del procedimiento de mérito. (Fojas 14-15 del expediente)
- b) El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA-L/062/16, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado remitiendo en copia simple: el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/25795/15 de fecha 11 de diciembre de 2016, el escrito de respuesta por medio del cual el Partido Verde Ecologista de México dio respuesta el 18 de diciembre de 2016, razón y constancia de fecha veintiséis de noviembre de 2015 mediante la cual se hicieron constar las muestras obtenidas como resultado del monitoreo realizado a la página de Facebook del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, entonces candidato por el Partido Verde Ecologista de México al cargo de Diputado Local por el Distrito Local 12 con cabecera en Hidalgo, en el estado de Michoacán en las cuales se observa un vehículo tipo camper, camión, tráiler o vehículo, así como el remolque, semi remolque, o caja accesoria al mismo rotulado con propaganda alusiva al entonces candidato, así mismo, la Dirección en comento remitió la evidencia adjunta a la póliza identificada con el número 12 mediante la cual el partido político en cuestión registra el gasto por la rotulación del camper presuntamente utilizado para realizar las consultas médicas. (Fojas 16-67 del expediente).

VII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. El ocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/4062/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Michoacán, el inicio del procedimiento administrativo oficioso de mérito. (Fojas 68-73 del expediente)

VIII. Solicitud de información y documentación a la Representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Partido Verde Ecologista de México.

- a) El once de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/5458/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto a efecto de que informara todo lo relativo a las consultas médicas materia de investigación, pidiendo que señalara la cantidad y el tipo de consultas médicas (general o especialidad) que presuntamente fueron practicadas, así como los datos de localización (nombre y domicilio) de las personas que fueron beneficiadas con las mismas y de los médicos, especialistas o enfermeros que presuntamente prestaron sus servicios para la ejecución de esta actividad, adicionalmente se solicitó la información referente a la cantidad y tipo de medicamentos que fueron entregados a los beneficiados y el equipamiento médico utilizado, así como toda la documentación jurídica y contable que ostentara en su poder acerca de la conclusión objeto de estudio. (Fojas 74-77 del expediente).
- b) El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito número PVEM-INE-147/2016, signado por la representación del partido incoado, dio respuesta a lo solicitado, manifestando que las consultas médicas materia de investigación son inexistentes, toda vez que la creación e implementación de consultorios móviles para ofrecer consultas médicas gratuitas en las zonas con mayor índice de pobreza y marginación fue solamente una propuesta de campaña con el fin de ayudar a la ciudadanía en caso de que el entonces candidato resultara electo.

Por otro lado aclaró que, respecto a la rotulación del vehículo materia de análisis, la documentación soporte se encuentra adjunta como evidencia dentro de la póliza identificada con el número 12 en el Sistema Integral de

Fiscalización, como lo mencionó dentro de su respuesta al oficio de errores y omisiones.

Así mismo, respecto a las imágenes obtenidas del monitoreo a páginas de internet y redes sociales señaló lo siguiente:

- Que por cuanto hace a la imagen en la que se advierte un vehículo tipo tráiler rotulado con propaganda alusiva a la campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, es la misma que fue adjuntada como evidencia en el sistema por lo que hace a la póliza 12.
- Que por lo que respecta a la muestra en la que se advierte a una persona de la tercera edad, sentada frente a una mesa en la que se observan diversas cajas y frascos de medicamentos, quien se presume está siendo atendida por una persona que porta vestimenta blanca, la misma no le puede ser imputada al partido político, toda vez que de su contenido no se advierte algún logotipo o propaganda alusiva al mismo.

Finalmente aclaró que las redes sociales, como lo es Facebook (red social donde en la realización del monitoreo se encontraron las imágenes que dieron origen al procedimiento de mérito) al no encontrarse reguladas, cualquier persona puede subir imágenes y contenido sin que exista previo consentimiento de las partes y no se puede tener certeza de que la información sea veraz. (Fojas 78-84 del expediente).

IX. Solicitud de información y documentación al C. Luis Humberto Rodríguez Santana.

- a) El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/5457/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió en los mismos términos que al Partido Verde Ecologista de México al C. Luis Humberto Rodríguez Santana en su carácter de entonces candidato al cargo de Diputado Local, por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, en el estado de Michoacán. (Fojas 91-93 del expediente).
- b) El veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana mediante escrito sin número remitió respuesta al oficio señalado en el inciso precedente, negando haber realizado las consultas médicas de forma gratuita ni bajo algún costo, así mismo manifestó que tanto él como el instituto político que lo postuló presentaron como parte de las propuestas de campaña

durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, eran la creación e implementación de consultorios móviles que ofrecieran consultas gratuitas en las zonas con mayor índice de pobreza y marginación como una medida de ayuda para la ciudadanía del Distrito, así mismo señaló que las consultas médicas de mérito son inexistentes, ya que fueron exclusivamente una propuesta de campaña que no se concretó, adicionalmente aclaró que en la póliza 12 del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntó la información y documentación correspondiente a la rotulación del vehículo materia de investigación. (Fojas 85-98 del expediente).

X. Segunda solicitud de información a la Representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Partido Verde Ecologista de México.

- a) El seis de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/7332/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la representación del partido político incoado, informara el nombre de la persona física o moral con quien contrató el arrendamiento del vehículo rotulado que presuntamente fue utilizado como consultorio móvil, así como los datos de identificación del mismo, adicionalmente se le solicitó remitiera toda la documentación jurídica y contable que ostentara en su poder acerca del gasto materia de análisis, lo anterior toda vez que de la verificación a la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de México en el Sistema Integral de Fiscalización, la autoridad electoral advirtió que no se localizaron registros contables respecto al arrendamiento del vehículo de mérito. (Fojas 99-100 del expediente)
- b) El doce de abril de dos mil dieciséis, mediante escrito número PVEM-INE-0174/2016 la representación suplente del partido incoado dio respuesta negando haber celebrado algún contrato relativo al arrendamiento del vehículo materia de investigación, adicionalmente informó que el dieciocho de noviembre de dos mil quince, el instituto político celebró una adenda al contrato de donación pura y simple de campaña, la cual tuvo por objeto reconocer que el monto reportado a la autoridad electoral por concepto de la rotulación del vehículo incluía el uso exclusivo del camper por un día para llevar a cabo una toma fotográfica en beneficio de la campaña del entonces candidato, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, así mismo precisó que la documentación respectiva fue adjuntada en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante póliza número 12, el cinco de diciembre del año dos mil quince, correspondiente al primer periodo del tipo de operación normal. (Fojas 101-106 del expediente)

XI. Requerimiento de información y documentación al representante y/o apoderado legal de la persona moral Grafi-k Impresiones, S.A de C.V.

- a) Mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán, notificara el requerimiento realizado al representante y/o apoderado legal de la persona moral denominada Grafi-k Impresiones, S.A de C.V. a efecto de que informara el nombre de la persona física, moral o partido político que contrató la rotulación del vehículo materia de investigación, así mismo remitiera toda la documentación soporte que acreditara su dicho y detallara los datos de identificación del vehículo rotulado por su representada. (Fojas 107 a 111 del expediente).
- b) El trece de mayo de dos mil dieciséis, el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta autoridad. (Fojas 112 a 124 del expediente)
- c) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la persona moral confirmó la rotulación del vehículo de mérito, así mismo señaló que expidió a nombre del C. Luis Humberto Rodríguez Santana una nota de venta por un monto de \$4,530.96 (cuatro mil quinientos treinta pesos 96/100 M.N.) misma que fue pagada en ese momento en efectivo, adicionalmente remitió como documentación soporte la nota de venta correspondiente, acta constitutiva e identificación. (Fojas 125-169 del expediente).

XII. Acuerdo de ampliación de término para resolver.

- a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo para presentar el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 170 del expediente).
- b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio número INE/UTF/DRN/13045/2016, esta autoridad hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo el acuerdo referido en el inciso anterior (Foja 172 del expediente).

XIII. Solicitud de información al C. Rubén Padilla Soto en su carácter de Presidente Municipal de Hidalgo Michoacán.

- a) Mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán, notificara el requerimiento realizado al C. Rubén Padilla Soto en su carácter de Presidente Municipal de Hidalgo, Michoacán, a efecto de que informara si tuvo conocimiento de que el entonces candidato utilizó un vehículo tipo camper como consultorio móvil para la práctica de consultas médicas en la vía pública y en su caso; remitiera los permisos o autorizaciones solicitadas por el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, así mismo se le pidió que en caso de ser negativa la respuesta informara el proceso administrativo que debía seguir cualquier persona para la práctica de consultas médicas y para la permanencia de un vehículo con las características referidas en la vía pública. (Fojas 173-175 del expediente)
- b) El tres de agosto de dos mil dieciséis, el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta autoridad. (Fojas 176 a 179 del expediente)
- c) El tres de agosto de dos mil dieciséis, el ciudadano requerido en su carácter de Presidente Municipal mediante oficio número 691/2016 dio respuesta a la solicitud formulada manifestando que ante la dependencia que representa, no existe constancia de alguna solicitud presentada por parte del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, en su carácter de entonces candidato al cargo de diputado local, por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, en el estado de Michoacán para la estancia de un remolque y/o la práctica de consultas médicas en la vía pública, así mismo informó que la práctica de consultas médicas en el estado de Michoacán debe realizarse de conformidad con lo previsto en la Ley de Salud y la permanencia de un vehículo con publicidad electoral en la vía pública conforme a la regulación del Código Electoral de la entidad. (Foja 180 del expediente).

XIV. Tercera solicitud de información a la Representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Partido Verde Ecologista de México.

- a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/19805/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la

representación del partido político incoado, remitiera la documentación que acreditara el registro de la adenda al contrato de donación pura y simple de campaña, la cual según el dicho del partido político incoado fue adjuntada en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia a la póliza número 12, de cinco de diciembre del año dos mil quince, la cual fue celebrada a fin de reconocer que el monto reportado a la autoridad electoral por concepto de la rotulación del vehículo de mérito incluía también su uso exclusivo por un día para tomas fotográficas.(Fojas 181-182 del expediente)

- b) El treinta de agosto de dos mil dieciséis, mediante escrito número PVEM-INE-350/2016, la representación del partido incoado dio respuesta a lo solicitado, señalando que el cinco de diciembre de dos mil quince que se registró la aportación del entonces candidato, por un monto de \$4,530.96 (cuatro mil quinientos treinta pesos 96/100 M.N.), por concepto de la rotulación de un vehículo tipo camper y su uso exclusivo por un día, no fue incluida como evidencia en el sistema referido la adenda celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil quince, , misma que fue presentada como anexo del oficio PVEM-INE-0174/2016 y que se encuentra en poder del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán. .(Fojas 183-184 del expediente)

XV. Segundo Requerimiento de información y documentación al C. Jorge Luis Tinoco Ortiz en su carácter de representante legal de la persona moral Grafi-k Impresiones, S.A de C.V.

- a) Mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán, notificara el requerimiento realizado al C. Jorge Luis Tinoco Ortiz en su carácter de representante de Grafi-k Impresiones, S.A de C.V. a efecto de que informara los datos de identificación del vehículo que fue rotulado, señalando el número de placa, propietario y características, sin embargo; a la fecha de elaboración de la presente Resolución, la persona moral requerida no dio respuesta. (Fojas 185-186 del expediente).
- b) El veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada. (Fojas 187-208 del expediente)

XVI. Solicitud de información a la C. Silvia Hernández Capi en su carácter de Secretaria de Salud en el estado de Michoacán.

- a) Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán, notificara el requerimiento realizado a la C. Silvia Hernández Capi, en su carácter de Secretaria de Salud en el estado de Michoacán, a efecto de que informara si tuvo conocimiento o contaba con información relativa a algún permiso o autorización solicitada por el C. Luis Humberto Rodríguez Santana y/o el Partido Verde Ecologista de México para la práctica de consultas médicas en la vía pública durante el periodo de campaña dentro del marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015- 2016 y en caso de ser afirmativo informara el proceso que se debía seguir para llevar a cabo esta práctica en la vía pública y detallara si existe un control del personal médico y las consultas que se tenga que elaborar al respecto. (Fojas 209-210 del expediente).
- b) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada. (Fojas 211-221 del expediente)
- c) El diez de enero de dos mil diecisiete, el Titular del Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y/o de los Servicios de Salud de Michoacán remitió respuesta informando que durante el periodo requerido en los archivos y bases de datos de la Jurisdicción Sanitaria número dos adscrita al Municipio de Zamora y la Jurisdicción Sanitaria número tres adscrita al Municipio de Zitácuaro, ambas en el estado de Michoacán, no se cuenta ni se tiene permiso autorizado a nombre del C. Luis Humberto Rodríguez Santana y/o el Partido Verde Ecologista de México para la práctica de consultas médicas en una unidad móvil en la vía pública. (Fojas 229-230 del expediente).

XVII. Segunda solicitud de información a la Dirección de Auditoría.

- a) El dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/559/2016, se solicitó a la Dirección de Auditoría, si contaba con elementos para determinar el valor económico por concepto del uso de un vehículo tipo camper, así como del remolque, semi remolque o caja accesoria al mismo, por un día en el Municipio de Hidalgo, en el estado de Michoacán en el

marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016. (Fojas 222-223 del expediente).

- b) El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis mediante oficio INE/UTF/DA-L/1900/16, la Dirección referida en el numeral anterior, dio contestación a lo solicitado, remitiendo los costos que fueron localizados en el Registro Nacional de Proveedores por concepto de la renta de un vehículo tipo tráiler y un remolque por un día. (Fojas 226-228 del expediente).

XVIII. Solicitud de cotización de bienes y servicios al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Michoacán del Instituto Nacional Electoral.

- a) Mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán, realizara tres cotizaciones con base en las características físicas del vehículo materia de investigación. (Fojas 224-225 del expediente).
- b) El dieciocho de enero de dos mil diecisiete mediante oficio INE/VE/35/2017, la el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, dio contestación a lo solicitado, remitiendo una cotización de fecha doce de enero en Morelia, Michoacán; cuatro cotizaciones correspondientes a la 03 Junta Distrital Ejecutiva, en Zitácuaro, Michoacán; una cotización correspondiente a la Junta Distrital Ejecutiva 06 ubicada en Hidalgo, Michoacán y el oficio por medio del cual la Junta Distrital Ejecutiva 04 informa que no se localizaron a los proveedores para la solicitud de la cotización. (Fojas 242-250 del expediente)

XIX. Emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México

- a) El once de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/093/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado con la totalidad de constancias que integran el expediente del procedimiento de mérito. (Fojas 234-241 del expediente).
- b) El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante escrito número PVEM-INE-03/2017, signado por la representación suplente del partido incoado dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización se

transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 265-266 del expediente)

“(…)

1. El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán NO realizó ningún contrato sobre la renta del camper, camión, tráiler, vehículo, remolque, semi remolque o caja accesorio, toda vez que no fue necesario realizar este tipo de contrataciones.

2. El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán NO realizó ningún tipo de pago por concepto del gasto materia de análisis, toda vez que no se llevo a cabo ningún tipo de renta de ningún camper, camión, tráiler, vehículo, remolque, semi remolque o caja accesorio.

3. El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, presentó como parte de las propuestas de campaña durante el procesos electoral extraordinario 2015-2016 de los candidatos al cargo de Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, la creación e implementación de consultorios móviles, que ofrecieran consultas gratuitas en las zonas con mayor índices de pobreza y marginación, como una medida de ayuda para la ciudadanía del Distrito.

“(…)

5. De la documentación soporte de la presente queja NO se advierte ninguna contradicción ya que de la lectura de las constancias ninguna autoridad ha dicho lo contrario que mi representada Partido Verde Ecologista de México, por lo que existe la certeza de que no contratamos nada de lo que se nos pretende imputar.

“(…)”

XX. Emplazamiento al C. Luis Humberto Rodríguez Santana, en su carácter de entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 12 postulado por el Partido Verde Ecologista de México con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán.

- a) Mediante acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al C. Luis Humberto Rodríguez Santana, en su carácter de entonces candidato al cargo de diputado local por el Distrito 12, en el estado de Michoacán, corriéndole traslado con la totalidad de constancias que integran el expediente del procedimiento de mérito. (Fojas 231-233 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

- b) El veintiuno de enero de dos mil diecisiete, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, en su carácter de entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 12, con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán remitió vía correo electrónico su respuesta al emplazamiento referido, situación que se hizo constar mediante razón y constancia (Foja 267 del expediente), por lo que de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 268-285 del expediente)

“(...) informo lo siguiente:

- a) En tiempo y forma, se dio contestación a su Oficio INE/UTF/DRN/5457/2016, dentro del Expediente INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH, el cual origino el requerimiento que nos ocupa y por consiguiente, da lugar a la presente contestación.*
- b) En la contestación de fecha 21 de marzo de 2016 a su Oficio INE/UTF/DRN/5457/2016, dentro del Expediente INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH, hago mención a lo que se y me consta, respecto de los señalamientos infundados que se mencionan.*
- c) Ratifico en cada una de sus partes, la contestación puntual realizada con anterioridad a los hechos inciertos que se me intentan señalar, en el Oficio INE/UTF/DRN/5457/2016, dentro del Expediente INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH.*
- d) Una vez más, reitero que el acercamiento de unidades médicas a las comunidades, fue una propuesta de campaña y como tal, carezco de la información que se me requiere, toda vez que no fue concretado el proyecto de brindar atención médica en caso de haber sido favorecido por el electorado, y por consiguiente, me encuentro en estado de indefensión ante tal señalamiento.*
- e) La rotulación del vehículo tipo camper fue acordada y pagada en efectivo, mediando como comprobante una nota de venta simple, en la cual se acento la cantidad acordada con el prestador de servicios.*

(...)”

XXI. Cierre de instrucción. El quince de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, Consejera Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno; el Consejero Electoral Lic. Javier Santiago Castillo y el Consejero Presidente Lic. Enrique Andrade González.

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016¹ e INE/CG319/2016², respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así como en el Acuerdo **INE/CG1047/2015**³, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria mediante Acuerdo INE/CG263/2014.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLV/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”** y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: **“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”**, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por

¹ Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/2016

² Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016

³ El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia.

tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo **INE/CG319/2016**.

3. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto Resolutivo **DÉCIMO TERCERO**, en relación con el considerando **18.5**, inciso **e)**, conclusión **7** de la Resolución **INE/CG17/2016**; así como del análisis de los documentos y actuaciones que integran este expediente, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar lo siguiente:

- Si el Partido Verde Ecologista de México y su entonces candidato al cargo a Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, en el estado de Michoacán, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana destinaron recursos económicos para la realización de consultas médicas, lo cual implica el costo por pago de honorarios del personal profesional que en su caso las haya realizado, situación que de acreditarse no se encuentra vinculada al objeto del gasto de los fines de la campaña electoral
- Por otra parte, determinar si se actualiza una infracción en materia de fiscalización por lo que hace a la omisión de reportar el ingreso o gasto relativo al uso de un vehículo tipo tráiler, así como del remolque o caja accesoria al mismo, el cual fue rotulado con propaganda alusiva a la entonces campaña y que presuntamente fue utilizado como consultorio móvil.

Lo anterior, en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, en el estado de Michoacán, por lo que tales conductas de ser el caso, actualizarían un beneficio económico sujeto a cuantificarse al tope de gastos de campaña correspondiente.

En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n) y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

(...)”

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido para cada periodo.

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)

Artículo 127

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea

convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales

En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.

Por lo que hace al gasto no partidista, la norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder

público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalados por la ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

Finalmente, podemos concluir que se tratan de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Origen del procedimiento

Resulta importante para efecto de claridad en el desarrollo de la línea de investigación señalar las causas que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso que por esta vía se resuelve.

Bajo esta tesitura en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, periodo de campaña, la autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización realizó diversos monitoreos, entre ellos el correspondiente a medios digitales, en específico a la red social conocida como Facebook⁴.

Como consecuencia de lo anterior se observó la existencia de una página de Facebook con el nombre del C. Luis Humberto Rodríguez Santana entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 12, con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán, en la que se observaron imágenes fotográficas de la presunta práctica de consultas médicas en la vía pública, concepto que no fue reportado en el informe de campaña respectivo; así como los conceptos que en su caso se utilizaron para su consecución.

Para mayor referencia, las imágenes⁵ relacionadas con los hechos señalados en el párrafo que precede serán analizadas en párrafos posteriores.

En este orden de ideas con base en las facultades de vigilancia y fiscalización en el marco de la revisión la autoridad electoral requirió al instituto político a efecto de que presentara la documentación jurídica y contable que acreditara el registro y comprobación de los conceptos de gasto advertidos en el monitoreo de la red social referida; no obstante, fue omiso en su contestación.

Visto lo precedente, se consideró necesario el inicio del procedimiento de mérito con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba que permitieran acreditar o desvirtuar conductas infractoras en materia de fiscalización.

⁴ Al respecto, el monitoreo realizado por la autoridad electoral a las principales páginas de internet y redes sociales durante el periodo de campaña se realizó el ocho de noviembre al dos de diciembre de dos mil quince.

⁵ Las imágenes obtenidas son consultables en la siguiente liga electrónica:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=145456009147919&set=pcb.145456062481247&type=3&theater>

Investigación.

En este orden de ideas, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Ahora bien, con el objeto de contar con la documentación e información que originó el procedimiento de mérito, la autoridad electoral solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera las conclusiones y resultados obtenidos del análisis a la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de México, así como la información y documentación obtenida en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el estado de Michoacán que se encontraran relacionados con la observación.

Al respecto, la Dirección de Auditoría remitió lo siguiente:

- Oficio de errores y omisiones número INE/UTFDA-L/25795/15 de fecha once de diciembre de dos mil dieciséis.
- Razón y constancia en donde se hicieron constar las imágenes obtenidas en el monitoreo a páginas de internet y redes sociales de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Documentación que adquiere el carácter de pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

- Escrito de respuesta del Partido Verde Ecologista de México sin número de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis.
- Evidencia de la póliza identificada con el número doce, misma que contiene la información relativa al registro por concepto de la rotulación del camper presuntamente utilizado como consultorio móvil.

Documentación que adquiere el carácter de privada en términos de lo expuesto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos referido.

Bajo esta tesitura lo procedente es analizar los alcances de los elementos de prueba que sustentan el procedimiento de mérito en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que se tomen en cuenta para su cuantificación de acreditarse su existencia, considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y cuantitativos materia en la presente investigación, pues de otra forma se estaría ante una pesquisa generalizada.

Así las cosas, en atención a las conductas materia de investigación resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento en que se actúa.

Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad.

El orden de los apartados es el siguiente:

- A. Por lo que hace a la presunta práctica de consultas médicas gratuitas.**
- B. Por lo que hace a la aportación en especie de un vehículo automotor y su caja accesorio.**

A continuación se desarrollan los mismos:

- A. Por lo que hace a la presunta práctica de consultas médicas gratuitas.**

En el presente apartado se desarrolla la línea de investigación que siguió la autoridad electoral con la finalidad de acreditar o desvirtuar los hechos materia del presente apartado, los cuales se encuentran relacionados con la presunta existencia de consultas médicas gratuitas dirigidas a la ciudadanía durante el periodo de campaña.

Así pues, derivado de las constancias obtenidas del monitoreo a redes sociales llevadas a cabo por la autoridad electoral, se observaron tres conceptos de gasto básicos para la presunta ejecución de las consultas materia de investigación, mismas que se señalan a continuación:

REF	CONCEPTO
1	Consultas médicas (Médicos)
2	Medicamentos
3	Instalaciones

Al efecto, los conceptos de gasto advertidos se desprenden de las siguientes imágenes fotográficas

Imagen 1



En la imagen anterior se puede advertir a una persona de la tercera edad sentada frente a una mujer vestida de color blanco, una mesa que encima tiene lo que se presume como medicamentos.

Aunado a ello, se lee el texto siguiente:

“El consultorio móvil nos señaló que las propuestas del Verde son acertadas, necesarias y urgentes de atender. CERRAR PUERTAS AL PASADO ABREN VENTANAS AL PORVENIR.”

Imagen 2



En la imagen anterior se advierte un vehículo tipo tráiler, así como el remolque, semi- remolque o caja accesoria al mismo, rotulado con la propaganda siguiente: “Beto Mena”, “Al fin uno bueno”, “Candidato a Diputado Distrito 12 Michoacán”, “Móvil” y “gratis”.

Adicionalmente se advierte el texto siguiente:

“Como parte del compromiso que sentimos los candidatos del Partido Verde en el Distrito XII, se están ofreciendo CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS, así como los medicamentos que tenemos. Esta actividad se estará ofreciendo para las comunidades de los cinco municipios del Distrito XII siendo Diputados.”

Bajo esta tesitura, para acreditar la existencia de las consultas médicas, resulta trascendente contar con elementos de certeza que permitan determinar lo siguiente:

- Existencia de las consultas (método de ejecución, desarrollo, características particulares).
- Temporalidad.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

- Lugar físico en que se realizaron.
- El personal que las realizó.
- Entrega de medicamentos.

De acreditarse lo anterior, tendrá que determinarse el beneficio erogado a la campaña del entonces candidato a diputado local que omitió de reportar en el informe correspondiente, así como valorar la legalidad del mismo.

Consecuentemente, la autoridad electoral realizó las diligencias pertinentes a efecto de allegarse de medios de prueba adicionales que permitieran acreditar o desvirtuar los hechos investigados, por lo que requirió en primera instancia a los sujetos incoados, por lo que previo requerimiento el partido incoado manifestó lo siguiente:

- Que no realizó ni llevó a cabo algún tipo de evento, consulta o servicio médico, de manera gratuita ni bajo algún costo, durante el periodo de campaña, toda vez que no forman parte de las actividades propias del partido.
- Que su representación en Michoacán presentó como parte de las propuestas de campaña durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 de los candidatos al cargo de Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, la creación e implementación de consultorios móviles, que ofrecieran consultas gratuitas en las zonas con mayor índice de pobreza y marginación, como una medida de ayuda para la ciudadanía del Distrito.
- Que la imagen 1 no se encuentra vinculada al instituto político, pues como se advierte de su contenido no existe propaganda que haga referencia al Partido Verde Ecologista de México o beneficio al entonces candidato.

Por su parte el C. Luis Humberto Rodríguez Santana en su carácter de entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 12, con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán, negó de igual forma la existencia de las consultas médicas y todo aquello que conlleva su realización.

- Que el instituto político que lo postuló y él no realizaron o contaron con servicio médico, atención médica o consultas médicas en el periodo de campaña.

- Que la creación e implementación de consultorios móviles, que ofrecieran consultas médicas gratuitas en las zonas con mayor índice de pobreza y marginación, en los lugares más apartados de la cabecera municipal, fue solamente una propuesta de campaña que no se materializó al no haber sido favorecido por la voluntad popular.

Ante la negativa del Partido Verde Ecologista de México y el entonces candidato y toda vez que no se contaba con circunstancias de modo y lugar; así como nombres de ciudadanos que se hubiesen beneficiado del servicio médico, - elemento fundamental para acreditar la existencia del concepto investigado- se consideró dirigir la línea de investigación a la **Presidencia del Municipio de Hidalgo** y la **Secretaría de Salud**, ambas en el estado de Michoacán.

Lo anterior, a efecto de que informaran si tuvo conocimiento o si contaban con información relativa a algún permiso o autorización solicitada por el entonces candidato referido para llevar a cabo la práctica de consultas médicas en la vía pública y en caso de ser negativa la respuesta, informaran el procedimiento que se debía seguir para llevar a cabo consultas médicas en la vía pública.

Por lo que hace a la **Presidencia Municipal**, se obtuvo lo siguiente:

- Que ante la Presidencia Municipal no existía constancia de solicitud alguna presentada por el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 para la práctica de las consultas médicas.
- Que por lo que hace a la práctica de servicios médicos en el estado de Michoacán, estas deben realizarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 21, 31 bis y demás aplicables en la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al respecto de la **Secretaría de Salud** manifestó:

En este contexto, la Secretaria en comento remitió respuesta informando que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Michoacán requirió a la Jurisdicción Sanitaria No 2 radicada en el Municipio de Zamora y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 radicada en el Municipio de Zitácuaro, ambos en el estado de Michoacán, consecuentemente el Titular del Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y/o de los Servicios de Salud de Michoacán dio respuesta a la solicitud informando lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

- Que la Jurisdicción Sanitaria número tres radiada en el Municipio de Zitácuaro no cuenta con constancias o registros relativos a solicitudes presentadas por los sujetos incoados para el funcionamiento de unidad médica móvil, durante el periodo referido.
- Que en los archivos y base de datos del Departamento de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria número 2 radicada en el Municipio de Zamora no se cuenta con constancia alguna relativa a algún permiso solicitado por el C. Luis Humberto Rodríguez Santana o el Partido Verde Ecologista de México dentro del periodo de la campaña extraordinaria para la práctica de consultas médicas en una unidad móvil en la vía pública.

Finalmente, de la verificación al monitoreo realizado por la autoridad electoral a medios impresos no se advirtió la existencia de alguna nota periodística en medio impreso o digital que refiriera la existencia de las consultas médicas bajo investigación.

Visto lo precedente, de la valoración en lo individual y en conjunto de los elementos probatorios obtenidos durante la sustanciación del procedimiento de mérito, esta autoridad electoral no acreditó la existencia de consultas médicas realizadas por el Partido Verde Ecologista de México en el marco de la campaña extraordinaria celebrada en el Municipio de Hidalgo, Michoacán.

Máxime que el instituto político y el entonces candidato indicaron que las imágenes correspondieron únicamente a una propuesta de campaña; no obstante, como se advierte no se obtuvieron mayores elementos que desvirtuaran lo contrario.

Al respecto, únicamente se contó con la razón y constancia de las imágenes observadas en la página de internet referida, las cuales adquirieron el carácter de valor indiciario en cuanto a su contenido para realizar la investigación correspondiente, por lo que al no contar con elementos de convicción que permitan acreditar una infracción en materia de fiscalización debe operar en beneficio del instituto político el principio in dubio pro reo reconocido por el derecho administrativo sancionador electoral, al no tener certeza para determinar si se llevó a cabo la prestación del servicio.

En efecto, el principio *in dubio pro reo* ha sido conceptualizado como el privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de “*presunción de inocencia*” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la Tesis **XLIII/2008**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.”

(Énfasis añadido)

El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi, Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:

“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.

En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.

En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados.

A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos.

Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de investigación.

Derivado de lo anterior, al no contar con elementos de prueba que acrediten la existencia de consultas médicas se concluye que el Partido Verde Ecologista de México y su entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 12, con cabecera en Hidalgo, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana no incumplieron con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **infundado** el presente apartado.

B. Por lo que hace a la aportación en especie de un vehículo automotor y su caja accesorio.

Al respecto se presenta la línea de investigación y conclusiones a las que arribó la autoridad electoral relacionadas con el uso de un vehículo tipo tráiler así como su caja accesorio o remolque el cual fue rotulado con la propaganda siguiente: *“Beto Mena”, “Al fin uno bueno”, “Candidato a Diputado Distrito 12 Michoacán”, “Móvil” y “gratis”,* vehículo que se advirtió en uno de las imágenes que originó el procedimiento de mérito. Tal como se puede observar a continuación:

Imagen 2



En la imagen anterior se advierte un vehículo tipo tráiler, así como el remolque, semi- remolque o caja accesoria al mismo, rotulado con la propaganda siguiente: *“Beto Mena”, “Al fin uno bueno”, “Candidato a Diputado Distrito 12 Michoacán”, “Móvil” y “gratis”*.

Al respecto, previo requerimiento el Partido Verde Ecologista de México, manifestó lo siguiente:

- Que como parte de las propuestas de campaña presentó la creación e implementación de consultas médicas gratuitas en las zonas con mayor índice de pobreza y marginación, como una medida de ayuda para la ciudadanía del Distrito, durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, la cual no fue materializada.

- Que dentro del Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en su póliza número 12, se adjuntó la totalidad de la información y documentación relativa al vehículo materia de investigación.
- Que la imagen obtenida como resultado del monitoreo a páginas de internet y redes sociales en la cual se advierte un vehículo tipo tráiler, así como la caja accesoria al mismo con propaganda alusiva a su entonces campaña, fue reportada en el Sistema Integral de Fiscalización en la póliza respectiva.

Por su parte el C. Luis Humberto Rodríguez Santana en su carácter de entonces candidato a Diputado Local del Distrito 12, con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán, aclaró lo que a continuación se señala:

- Que el instituto político informó dentro del Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la póliza identificada con el número 12, toda la información relativa al vehículo tipo tráiler, que fue rotulado con propaganda alusiva a su entonces campaña, **el cual sirvió como modelo de lo que podrían haber sido las unidades médicas** que formaron parte de sus propuestas como candidato en el Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Michoacán.

Derivado de lo anterior, en plenitud de atribuciones, la autoridad electoral requirió a la persona moral denominada Grafi-k Impresiones S.A de C.V. a efecto de que informara y en su caso remitiera la información relativa a la persona física, moral o partido político que lo hubiere contratado para llevar a cabo la rotulación del vehículo materia de análisis, precisara sus datos de identificación (número de placa, propietario y características) e indicará si el costo de rotulación incluía el arrendamiento del vehículo y su caja accesoria.

De su respuesta se obtuvo:

- Que efectivamente el vehículo materia de análisis fue rotulado con propaganda alusiva a la campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

- Que el pago del servicio, fue realizado por el entonces candidato en efectivo, por lo que se expidió la nota de venta respectiva por un monto de \$4,530.96 (cuatro mil quinientos treinta pesos 96/100 M.N).
- Que no dio contestación a la solicitud de información realizada por la autoridad con la finalidad de aclarar si el costo de rotulación incluía el
- del vehículo automotor y su caja accesoria.

Para acreditar su dicho, Grafi-k Impresiones S.A de C.V, remitió lo siguiente:

- Nota de venta de dieciocho de noviembre de dos mil quince, expedida por Grafi-k Impresiones S.A de C.V. a favor del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, por un importe de \$4,530.96 (cuatro mil quinientos treinta pesos 96/100 M.N.), la cual ampara el pago por concepto de la rotulación de un camper.

En este contexto, del análisis a las respuestas de los entes involucrados se advirtieron dos elementos trascendentales:

- 1) El registro realizado en Sistema Integral de Fiscalización por concepto de rotulación del vehículo investigado.
- 2) El presunto uso del vehículo como modelo de lo que representó una propuesta de campaña del entonces candidato referido, por lo que su uso implica el arrendamiento o aportación del mismo.

Al respecto, de la verificación realizada a la **póliza número 12**, de cinco de diciembre de dos mil quince, correspondiente al primer periodo, del tipo de operación normal, la autoridad electoral advirtió el reporte por concepto de la rotulación de un vehículo tipo camper, por un monto de **\$4,530.96 (cuatro mil quinientos treinta pesos 96/100 M.N.)** sin que se observara información o documentación relativa al uso del vehículo en cuestión, a continuación se presenta el registro.

CONSEJO GENERAL INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

https://sif.ine.mx/sif/app/temporalidad/consulta?execution=e2s1

Inicio / Temporalidad / Consultar

Consulta Temporalidad

Los datos con (*) son requeridos.

Administración de fechas(seleccione los niveles a consultar)

Ámbito: (*) Campaña Local Extraordinaria

Candidatura: (*) Diputado Local

Entidad: (*) Michoacán

Tipo de Sujeto obligado: Partidos Políticos Nacionales

Sujeto obligado: Partido Verde Ecologista de México

Subnivel entidad: Distrito 12

Buscar temporalidades

Número de periodo	Etapas	Sujeto Obligado	Ámbito	Entidad	Subnivel entidad	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha inicio captura	Fecha fin captura
1	Normal	Partido Verde Ecologista de México	Campaña Local Extraordinaria	Michoacán	Distrito 12	06-Noviembre-2015	02-Diciembre-2015	08-Noviembre-2015	05-Diciembre-2015
1	Normal - Envío de Informe	Partido Verde Ecologista de México	Campaña Local Extraordinaria	Michoacán	Distrito 12	03-Diciembre-2015	05-Diciembre-2015	03-Diciembre-2015	05-Diciembre-2015
1	Revisión de Informe	Partido Verde Ecologista de México	Campaña Local Extraordinaria	Michoacán	Distrito 12	06-Diciembre-2015	11-Diciembre-2015	08-Diciembre-2015	11-Diciembre-2015
1	Ajuste	Partido Verde Ecologista de México	Campaña Local Extraordinaria	Michoacán	Distrito 12	08-Noviembre-2015	02-Diciembre-2015	12-Diciembre-2015	18-Diciembre-2015

En consecuencia, la autoridad electoral requirió al instituto político incoado a efecto de que informara lo relativo a la persona física o moral con quien contrató la renta del vehículo materia de análisis, remitiera el contrato y la documentación que acreditara el pago respectivo, así como informara los datos de identificación del vehículo (número de placa). Al respecto señaló:

- Que su representación en el estado de Michoacán no celebró ningún contrato ni realizó algún pago por concepto del arrendamiento del vehículo.
- Que es imposible presentar información, toda vez que no realizó ningún tipo de contratación por dicho concepto.
- Que el dieciocho de noviembre de dos mil quince, se firmó una adenda al contrato de donación pura y simple de campaña, en la cual se estipuló y reconoció que dentro de la aportación del C. Luis Humberto Rodríguez Santana por concepto de la rotulación del vehículo, se incluía su uso exclusivo por un solo día, a fin de realizar una toma fotográfica.

Para acreditar su dicho, remitió:

- Copia simple de la Adenda al contrato de donación pura y simple de campaña celebrado el dieciocho de noviembre de dos mil quince, identificada con el número 001, celebrada entre el Partido Verde Ecologista de México, representado en el acto por el C. Jonathan Sanata González, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Michoacán, y el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, la cual tuvo por objeto reconocer que el monto de \$4,530.96 (cuatro mil quinientos treinta 96/100 M.N.) incluía la rotulación del camper y su uso exclusivo por un día, para la realización de una toma fotográfica para la campaña del candidato incoado.⁶

En este orden de ideas, derivado de la respuesta remitida por el instituto político, la autoridad electoral procedió a verificar el registro de la adenda materia de análisis en la póliza número 12, de cinco de diciembre del año dos mil quince, correspondiente al primer periodo del tipo de operación normal, advirtiéndose que la misma no se encontraba cargada al Sistema Integral de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, la autoridad electoral consideró necesario requerir de nueva cuenta al instituto político incoado a efecto de que remitiera la documentación que acreditara el registro de la adenda respectiva en el Sistema Integral de Fiscalización, informando:

- Que el cinco de diciembre de dos mil quince, registró a través del Sistema Integral de Fiscalización, en la póliza número 12, la aportación del candidato C. Luis Humberto Rodríguez Santana, la cual incluía la rotulación del camper y su uso exclusivo por un día.
- Que la adenda referida no fue incluida en el sistema en comento
- Que dicha documental se encuentra en el poder de la Representación del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Michoacán.


⁶ La adenda presentada por el instituto político, se considera una documental privada en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización la cual cuenta con valor indiciario.

**CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH**

- Que la adenda fue presentada como anexo al escrito de respuesta del partido incoado a la segunda solicitud de información de esta autoridad mediante oficio PVEM-INE-0174/2016, de fecha 12 de abril de 2016.
- Que en ningún momento utilizó para otro fin el “camper”, toda vez que no era posible su utilización para otros fines, así como tampoco se contaba con las herramientas, materiales, condiciones y/o vehículos necesarios para ser utilizado.


Análisis del registro contable.

Toda vez que el partido político manifestó que el registro contable relativo a la póliza 12 amparó la rotulación y uso de del vehículo observado por un día, del análisis al registro en el Sistema Integral de Fiscalización versión 1.7, se advirtió lo siguiente:

 INE Instituto Nacional Electoral		PÓLIZA Nombre del Candidato: LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ SANTANA Ambito: Campaña Local Extraordinaria Sujeto Obligado: Partido Verde Ecologista de México Cargo: Diputado Local Entidad: Michoacán RFC: [REDACTED] CURP: [REDACTED]		
		ESTATUS DE LA PÓLIZA: Activa FOLIO DE LA PÓLIZA: 12 TIPO DE OPERACIÓN: Normal PERIODO DE LA OPERACIÓN: 1 DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: APORTACION EN ESPECIE DEL CANDIDATO, 1 SERVICIO DE ROTULACION DE CAMPER		
		FECHA DE MODIFICACION: 05/12/2015 0:00 FECHA DE REGISTRO: 05/12/2015 FECHA DE OPERACIÓN: 18/11/2015		
PRORRATEO: No CEDULA DE PRORRATEO:		TOTAL CARGO: \$ 4,530.96 TOTAL ABONO: \$ 4,530.96		
NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	CARGO	ABONO
5301080000	Otros Similares	APORTACION EN ESPECIE DEL	\$ 4,530.96	\$ 0.00
RFC DEL PROVEEDOR: CUENTA CLABE:		FOLIO FISCAL:		
4203020000	Especie	APORTACION EN ESPECIE DEL	\$ 0.00	\$ 4,530.96
RFC DEL PROVEEDOR: CUENTA CLABE:		FOLIO FISCAL:		

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

20.FORMATO "RSES-CL"-RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS LOCALES

 No. de Folio **005**

Lugar Hidalgo, Mich.
Fecha 18-Nov-2015
Bueno por \$ 4,530.96

EL COMITE EJECUTIVO ESTATAL EN MICHOACAN.

ACUSA RECIBO DE: NOMBRE DEL APORTANTE
Rodriguez Santana Luis Humberto
(APELLIDO PATERNO) (APELLIDO MATERNO) (NOMBRE(S))

O RAZON SOCIAL:

DOMICILIO DEL APORTANTE

CLAVE DE ELECTOR [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]
NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL (EN EL CASO DE PERSONAS MORALES)

DOMICILIO

TELEFONO

POR LA CANTIDAD DE \$ 4,530.96 (Cuatro mil quinientos treinta
pesos 96/100 M.N.)

BIEN APORTADO
1 Rotulación de Camper

CRITERIO DE VALUACION UTILIZADO*
Nota de venta

TIPO DE CAMPAÑA:
☐ GOBERNADOR
☒ DIPUTADO LOCAL
☐ AYUNTAMIENTO

DISTRITO: 12 Doce
NOMBRE: Hidalgo

NOMBRE Y FIRMA DEL APORTANTE
Luis Humberto Rodriguez Santana

NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE FINANCIERO

Como se puede observar en las imágenes de la póliza número 12 y del recibo de aportación en especie número de folio 005, el cinco de diciembre de dos mil quince, el Partido Verde Ecologista de México registró en el Sistema Integral de Fiscalización versión 1.7, la operación consistente en la aportación en especie por concepto de rotulación de un camper (aportación que realizó el entonces

candidato a su campaña)⁷ correspondiente al primer periodo del tipo de operación normal, por un importe de **\$4,530.96. (Cuatro mil quinientos treinta pesos 96/100 M.N.).**

Ahora bien es trascendente señalar que la documentación en comento **únicamente ampara el registro de la aportación en especie por la donación de la rotulación de un camper** sin que se desprenda la mención o referencia al uso de un vehículo tipo tráiler y la caja accesorio o camper.

Sirve para reforzar lo anterior el contrato de donación pura y simple suscrito entre el C. Jonathan Sanara González, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del partido en Michoacán y el C. Luis Humberto Rodríguez Santana.

A continuación se transcribe la parte que interesa:

DECLARACIONES

(...)

2.3 Que es su voluntad otorgar en donación 1 ROTULACIÓN DE CAMPER, el que acredita haber adquirido en base a dos cotizaciones, por un importe de **\$4,530.96** (cuatro mil quinientos treinta **96/100 M.N.**) documento que se adjunta al presente en copia simple como **ANEXO 2**, para la campaña del candidato **Luis Humberto Rodríguez Santana, Distrito 12, Hidalgo, Michoacán.**

(...)

CLÁUSULAS

(...)

SEGUNDA.- DONACIÓN PURA Y SIMPLE

'EL DONANTE' se obliga a transferir de manera pura y simple y sin reserva alguna a **'EL DONATARIO'** la propiedad del bien a la firma del presente,

⁷ Cabe señalar que de conformidad con la publicación realizada el martes diecisiete de noviembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo se señaló que el C. Luis Humberto Rodríguez Santana utilizaría como sobrenombre dentro de la campaña extraordinaria 2015-2016 en ese estado el referido como "Beto Mena", por lo que ambos nombres hacen referencia a la misma persona. La publicación en comento es consultable en la liga http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/periodicos/cua-3915_4.pdf.

cuyas características se detalla en la multicitada declaración .3, y ‘EL DONATARIO’ acepta la donación en los términos estipulados en el presente instrumento.”

Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México, exhibió una adenda al contrato precedente, presuntamente firmada el dieciocho de noviembre de dos mil quince, en la cual se establece:

“Por una parte, el Partido Verde Ecologista de México, representado por el C. Jonathan Sanata González, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, y por otra parte el C. LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ SANTANA, con domicilio en Ave. Morelos Pte. No. 53, Col. Centro, c.p. 61100, Hidalgo, Michoacán, acreditando ambos poder suficiente para suscribir esta ADENDA al contrato de campaña, firmado el día 17 de Noviembre de 2015, en adelante el CONTRATO, en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de Noviembre de 2015, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, celebro con el Partido Verde Ecologista de México, representado por el C. Jonathan Sanata González, un contrato de campaña

2. OBJETO

La presente ADENDA tiene por objeto reconocer e identificar que el costo de \$4,530.96 (Cuatro Mil Quinientos Treinta Pesos 96/100 M.N.) incluye la Rotulación del Camper y su uso exclusivo por un día, del 18 de Noviembre al 18 de Noviembre de 2015, para la realización de una toma fotográfica para la campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana.”

No obstante lo anterior, de la información proporcionada por el partido y el análisis a la misma se advierte que la adenda a la que el partido hace referencia en su escrito de respuesta del doce de abril de dos mil dieciséis, no se registró en el Sistema Integral de Fiscalización versión 1.7.

Al respecto la adenda no fue cargada al sistema mencionado dentro del periodo legalmente establecido para tal efecto contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de Campaña:

1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”

Consecuentemente, esta autoridad no tuvo conocimiento de la existencia del uso y disfrute del vehículo tipo tráiler y la caja accesorio o camper, situación que de haberse hecho del conocimiento de la autoridad en el momento procesal oportuno, -registrado- hubiese aparejado por ende la observación respectiva, pues la rotulación de un camper y la aportación del vehículo y camper, representan dos operaciones distintas que deben de registrarse conforme a la documentación soporte establecida en el Reglamento de Fiscalización.

En este contexto debe precisarse que la normatividad es clara al señalar que los partidos políticos se encuentran obligados a registrar y comprobar sus operaciones, lo anterior a fin de que sus movimientos contables sean registrados de manera armónica, delimitada y específica.

No obstante que el sujeto incoado reportó la rotulación del camper objeto, el mismo no realizó un registro contable por lo que hace al uso del camper para la sesión fotográfica a la que hace mención. En este sentido, de la lectura del contrato de donación pura y simple se advierte que su objeto únicamente trasciende a la aportación de la rotulación.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que la adenda no se hubiese registrado por error, la factura que ampara la rotulación no hace mención a otro concepto, se limita por el contrario a referir el pago por rotulación de camper y no así, por concepto de uso de vehículo y caja accesoria o camper, situación que es acorde con el registro originalmente realizado.

Por lo que se puede concluir que aunque son conceptos que presuntamente se encuentran relacionados corresponden a naturalezas distintas y por ende el registro contable obedece a características específicas del tipo de aportación, bajo esta argumentación se trata de dos prestaciones de servicios diferentes, uno por lo que hace al comodato del vehículo y camper y otro por lo que hace a la rotulación con propaganda electoral la cual fue reportada en el sistema; siendo así responsabilidad del partido incoado el reporte de ambos conceptos; sin embargo fue omiso en el registro del comodato del vehículo y caja accesoria o camper.

En este contexto, no obstante que los sujetos incoados señalaron que no erogaron ningún gasto por concepto del uso del vehículo materia de análisis, éste representó un beneficio económico a su entonces campaña; por lo que dicho beneficio se traduce en un recurso que dejó de reportar; consecuentemente al acreditarse el uso de un vehículo tipo tráiler y caja accesoria o camper rotulado con propaganda alusiva a la entonces campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana para dar a conocer una propuesta de campaña, se acredita que fue utilizado con fines electorales, el cual debe cuantificarse al tope de gastos de campaña del ciudadano en comento.

Bajo esta tesitura, de la valoración en lo individual y en conjunto de los elementos de prueba obtenidos durante la sustanciación del procedimiento de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de certeza que permiten acreditar el uso de un vehículo y caja accesoria o camper, que sirvió como modelo para la rotulación de propaganda electoral, el cual no se reportó en el informe de campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, acreditándose con ello su fin electoral.

En consecuencia, por los argumentos antes vertidos esta autoridad cuenta con elementos de convicción que le permiten acreditar el partido político omitió reportar en el informe de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el estado de Michoacán la aportación en especie por concepto de uso de un vehículo (comodato) y su caja accesorio o camper por un día para tomas fotográficas para la propuesta de consultorios móviles perteneciente a la campaña del entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán, el C. Luis Humberto Rodríguez Santana, por lo que el Partido Verde Ecologista de México incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por lo que debe declararse **fundado** el objeto de estudio del apartado de mérito.

Determinación del monto involucrado

Una vez que ha quedado acreditada la conducta infractora consistente en la omisión de reportar la aportación en especie consistente en el arrendamiento de un vehículo tipo camper el cual fue utilizado como consultorio móvil, se procedió a determinar el monto involucrado no reportado por el instituto político, de acuerdo al procedimiento que a continuación se detalla.

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 27, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, para la determinación de costos correspondientes a gastos no reportados se establece que se utilizará el valor más alto de la matriz de precios correspondiente al concepto específico no reportado. No obstante es trascendente indicar que no se contaron con elementos idénticos o características similares en la matriz en comento, por lo que se determinó realizar las cotizaciones correspondientes.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de determinar el beneficio económico y en aras de imponer una sanción que obedezca los parámetros de equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal forma que la misma no resulte desproporcionada o gravosa para el sujeto infractor, la autoridad electoral mediante Acuerdo de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Michoacán su colaboración a efecto de que con base en las características físicas del vehículo que aparece en las imágenes obtenidas en el monitoreo (dimensiones, material de fabricación, tipo y modelo), realizara tres cotizaciones con igual número de personas físicas o morales, relacionadas con el arrendamiento de vehículos, a efecto de obtener un rango de costos.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

En consecuencia, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán remitió los costos realizados con las personas morales Autotransportes de Carga Tresguerras, S.A. de C.V., Transportes Refigerados Medina, ARBE Paquetería y Mensajería, Alto Diseño S.A. de C.V. y las personas físicas Alejandra Martínez Colín y David Suárez Salgado, a efecto de que en ánimo de colaboración, informaran el costo cobrado por concepto de la renta de un vehículo tipo camper por un día, obteniéndose lo siguiente:

Persona física o moral requerida	Costo por concepto de renta de un vehículo tipo camper
Autotransportes de Carga Tresguerras, S.A. de C.V.	\$6,720.33 más IVA por el flete, más \$4,000.00 por la estadía de un día, dando un total de \$10,720.33.
Transportes Refigerados Medina	\$13,920.00
ARBE Paquetería y Mensajería	\$13,920.00
Alto Diseño S.A. de C.V.	La cotización presentada es mensual y por lo tanto no sirve para determinar el monto involucrado.
Alejandra Martínez Colín	\$15,080.00
David Suárez Salgado	\$13,920.00

Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, el importe a considerar como monto involucrado no reportado por el concepto señalado asciende a **\$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.)**.

Determinación oficiosa de las cifras finales de campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana.

En atención a las consideraciones vertidas en la resolución de mérito lo procedente es cuantificar al tope de gastos del informe de campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, el importe considerado como monto involucrado no reportado.

Bajo esta tesitura mediante Acuerdo CG-345/2015 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil quince el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, fijo como topes de gastos de campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, para el cargo

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

de Diputados de Mayoría Relativa por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo en el estado de Michoacán, la cantidad de \$1,423, 343.87.

Ahora bien, es importante señalar que en sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado [INE/CG16/2016] y la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los Candidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y del Ayuntamiento de Sahuayo, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016. [INE/CG17/2016].

En este contexto, se determinó como cifra final de gastos dictaminados por auditoría en el Informe de campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, correspondiente al estado de Michoacán, el importe de \$345,998.12 (Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 12/00 M.N.); cantidad a la que habrá de cuantificarse el monto involucrado determinado en el procedimiento de mérito, cuyo monto asciende a \$15,080.00 (Quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.); operación aritmética que a continuación se detalla:

Gasto Dictaminado por Auditoría en el Informe de Campaña (A)	Monto Involucrado determinado (B)	Total Cifra Final (C) (A) + (B) = C
\$345,998.12	\$15,080.00	\$361,078.12

Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, existe un rango de diferencia entre el tope de gastos establecido y la cifra final, por la cantidad de \$1,062,265.75 (un millón sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco pesos 75/100 M.N.); cantidad que resulta de la operación aritmética siguiente:

Tope de Gastos de Campaña (A)	Cifra Final de gastos (Dictamen + Queja) (B)	Diferencia(C) (A) - (B) = C
\$1, 423, 343.87	\$361,078.12	\$1,062,265.75

En consecuencia, se determina como cifra final de gastos en el informe de campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana, el monto de \$361,078.12

(trescientos sesenta y un mil setenta y ocho pesos 12/100 M.N.), el cual como se advierte no rebasa el tope de gastos fijado por la autoridad⁸.

4. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en el procedimiento de mérito se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

⁸ De conformidad con el Acuerdo INE/CG84/2015 celebrado en sesión extraordinaria el día seis de marzo de dos mil quince se determinó el límite de individual de las aportaciones de los simpatizantes, en dinero o en especie, se estableció la cantidad de \$1,680,560.42 (un millón seiscientos ochenta mil quinientos sesenta pesos 42/100 M.N.); ahora bien de las cifras dictaminadas por auditoría se desprende que el total ejercido en la entonces campaña del C. Luis Humberto Rodríguez Santana "Beto Mena" por lo que hace a las aportaciones de simpatizantes correspondió al monto de \$20,288.24 (veinte mil doscientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.), por lo que al cuantificarse el monto involucrado determinado en el procedimiento de mérito a las cifras dictaminadas, no se advierte una vulneración en materia de topes de simpatizantes.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 7 del Dictamen Consolidado, se identificó que el ente omitir registrar contablemente la aportación en especie relacionada con el comodato de un vehículo tipo tráiler y su caja accesoria o camper para ser utilizado como modelo de consultorio móvil.

En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión del ente político, consistente en haber incumplido con su obligación de reportar en el Informe de Campaña de los ingresos y gastos, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, el ingreso recibido por concepto de una aportación en especie, atentando contra lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado infractor omitir registrar contablemente la aportación en especie relacionada con el comodato de un vehículo tipo tráiler y su caja accesorio o camper para ser utilizado como modelo de consultorio móvil dentro de las actividades de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, por un monto de \$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.).

De ahí que este contravino lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió del estudio a la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Michoacán.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente la aportación en especie relacionada con el comodato de un vehículo tipo tráiler y su caja accesorio o camper para ser utilizado como modelo de consultorio móvil dentro de las actividades de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, por un monto de \$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.)

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el origen de los recursos.

En este orden de ideas, en la conclusión enunciada, los sujetos obligados vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79

- 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

(...)

b) Informes de Campaña:

- 1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad

fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional -en todos sus ámbitos: federal, local y municipal-, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los sujetos obligados a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. Así, la normatividad citada tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político, vulnera las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión séptima, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los ingresos que los partidos políticos obtengan durante el ejercicio objeto de revisión.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los ingresos que los entes políticos obtengan durante el ejercicio objeto de revisión.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en la falta de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos del sujeto obligado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido político no reportó el ingreso obtenido por una aportación en especie consistente en \$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.)
- Que con la actualización de la falta sustantiva que ahora se analiza, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.
- Que la conducta fue singular

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así en razón de que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos, toda vez que el partido omitió reportar en su informe correspondiente a campaña la totalidad de sus ingresos por concepto de una aportación en especie por concepto de comodato de un vehículo tipo tráiler para ser utilizado como consultorio móvil, realizado el dieciocho de noviembre de dos mil quince.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir, no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el ente político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho que el sujeto de mérito no cumpla con su obligación de reportar la totalidad de los ingresos recibidos durante la Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, impidió que esta autoridad tuviera certeza y existiera transparencia respecto de éstos. Por lo tanto, la irregularidad se traduce en una falta que impide que la autoridad electoral conozca de manera certera la forma en que el sujeto obligado ingresó diversos recursos, así como el monto de los mismos, en consecuencia, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar en el Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016, la totalidad de los ingresos obtenidos durante la etapa correspondiente, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo número CG-04/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en sesión extraordinaria de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de **\$11,598,100.66** (once millones quinientos noventa y ocho mil cien pesos 66/100 M.N.).

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta

las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de México por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes de pago al mes de febrero de dos mil diecisiete

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y

V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el partido político omitió reportar la totalidad de los ingresos realizados durante el periodo de campaña.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al instituto político, se actualizó al omitir reportar una aportación en especie incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el partido incoado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016.
- El partido político no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conducta a sancionar asciende a \$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 M.N.)
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la en la fracción V consistente cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial del presente procedimiento.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso⁹.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el ejercicio en que se cometieron los hechos, esto es, en dos mil quince, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido del Trabajo se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurren en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir reportar el ingreso** y las normas infringidas a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de la

⁹ Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al partido político debe ser mayor al monto del beneficio obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir reportar el ingreso, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **150%** (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado; por lo que asciende a un total de \$22,620.00 (veintidós mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **309** (trescientos nueve) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma que asciende a la cantidad de **\$22,569.36** (veintidós mil quinientos setenta y nueve pesos 36/100 M.N.).

5. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

Ecologista de México, en los términos del Considerando 3, Apartado A de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, en los términos del Considerando 3, Apartado B de la presente Resolución.

TERCERO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México una multa equivalente a **309** (trescientos nueve) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma que asciende a la cantidad de **\$22,569.36 (veintidós mil quinientos setenta y nueve pesos 36/100 M.N.)** de conformidad con lo expuesto en el Considerando 4, con relación al Apartado B del considerando 3 de la presente Resolución.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto que la multa determinada en el resolutivo anterior, que se captará del financiamiento público local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme.

QUINTO. Se instruye a la Instituto Electoral de Michoacán, que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH

SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de marzo de 2017, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**